

Santiago, diecinueve de junio de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos RIT 0-146-2020, RUC 2040295253-K, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, por sentencia de veinte de enero de dos mil veintidós, acogió la demanda de despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales interpuesta por don Hugo Andrés Bahamondes Guerrero en contra de la empresa Estacionamiento y Lavado de Vehículos Limitada, y, solidariamente, en contra de la Municipalidad de Llay Llay, en su calidad de empresa mandante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 183-A y siguientes del Código del Trabajo, condenándolas al pago de la indemnización sustitutiva, feriado legal y cotizaciones previsionales adeudadas y aquellas remuneraciones y prestaciones derivadas del contrato de trabajo, desde la fecha del despido hasta su convalidación, sobre la base de la remuneración mensual que indica, con los reajustes e intereses contemplados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

La demandada solidaria dedujo recurso de nulidad en contra del referido fallo y una sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintidós, lo acogió parcialmente y, en sentencia de reemplazo, rechazó la demanda de nulidad de despido interpuesta en contra de la referida Municipalidad, manteniendo en lo demás las decisiones contenidas en el fallo de primer grado.

En relación a esta última decisión, el actor interpuso recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando que esta Corte lo acoja y dicte la de reemplazo que describe.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando, respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas por uno o más fallos firmes emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenida en las diversas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna del o de los fallos ejecutoriados que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho que el recurrentes solicita unificar se refiere a la procedencia de aplicar la sanción de nulidad del despido, regulada en



el inciso quinto y séptimo del artículo 162 Código del Trabajo, a la empresa principal, conforme el tenor de lo dispuesto por el artículo 183 B del mismo cuerpo legal, refiriendo, en síntesis, que la sanción de nulidad de despido es aplicable a la empresa principal, sin que sea óbice el límite previsto a favor de las empresas contratistas en el artículo 183 B del estatuto laboral, porque como el hecho que genera la sanción se presenta durante la vigencia del régimen de subcontratación, se debe concluir que la causa que provoca su aplicación, esto es, el no pago de cotizaciones previsionales, se originó en el ámbito que debe controlar y en el que la ley le asignó responsabilidad, tal como ha sido resuelto en las sentencias de contraste que cita y acompaña.

Para los efectos de fundar el recurso cita las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y Puerto Montt en los autos roles N° 531-2021 y 166-2010, respectivamente. La primera de ellas, llamada a pronunciarse sobre la misma materia de derecho y con presupuestos fácticos similares a la impugnada refiere, en síntesis, que habiéndose acreditado la existencia de un régimen de subcontratación entre una empresa privada y la Municipalidad de Llay Llay (las que también se vinculaban en virtud de un contrato de concesión del servicio de control de tiempos de estacionamientos de vehículos en la vía urbana) y el incumplimiento por parte de la empleador de la solución de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, corresponde aplicar la sanción de nulidad de despido, por cuanto el hecho generador de dicha punición se produjo durante la época de vigencia del régimen de subcontratación.

La segunda sentencia de contraste, si bien se pronuncia sobre la procedencia de un régimen de subcontratación, no emite pronunciamiento en torno a la institución de nulidad de despido.

Tercero: Que de la lectura de la sentencia impugnada se observa, en cambio, que resuelve la controversia con un criterio diferente al del primer contraste explicitado en la motivación precedente, desde que al pronunciarse sobre el recurso de nulidad entablado por la demandada solidaria, Municipalidad de Llay Llay, señala, en síntesis que al tener la sanción de nulidad de despido un carácter punitivo, su interpretación debe hacerse de forma restrictiva, y al concurrir en la especie un elemento que autoriza a diferenciar su aplicación, por tratarse la demandada solidaria de un órgano de la administración del Estado, que no cuenta con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estime del caso, se grava en forma desigual al ente público, siendo improcedente la sanción contemplada en el artículo 162 incisos quinto y séptimo del estatuto laboral.



Cuarto: Que, como se observa, concurren dos interpretaciones sobre una idéntica materia de derecho, presupuesto necesario del recurso de unificación de jurisprudencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 483 del Código del Trabajo, por lo que se debe establecer cuál es la correcta.

Quinto: Que esta Corte, a partir de la sentencia dictada en el ingreso número 1.618-2014, de 30 de julio de 2014, y seguida posteriormente por la emitida en el rol N° 20.400-2015 de 28 de junio de 2016, hasta la actualidad, ha sostenido que la sanción prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo es aplicable a la empresa principal, sin que sea óbice el límite previsto a favor de las empresas contratistas en el artículo 183-B del mismo código, pues como el hecho que genera la sanción que establece el referido artículo 162 se presenta durante la vigencia del régimen de subcontratación, se debe concluir que la causa que provoca su aplicación, esto es, el no pago de las cotizaciones previsionales, se originó en el ámbito que debe controlar y en el que la ley le asignó responsabilidad, debido a la utilidad que obtiene del trabajo prestado por los dependientes de un tercero y por la necesidad de cautelar el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

Tal como se ha señalado, la referida conclusión se encuentra acorde con los objetivos de la ley que regula el trabajo en régimen de subcontratación, en la medida que establece un sistema de protección a los trabajadores que se desempeñan en dichas condiciones, ya que, como se indicó, instituyó respecto de la empresa principal una responsabilidad solidaria y subsidiaria en lo concerniente a las obligaciones laborales y previsionales que debe asumir el contratista respecto de su dependiente, para, en definitiva, estimular y velar por el cumplimiento efectivo y oportuno de dichas obligaciones, teniendo presente que la nueva normativa que regula el trabajo en régimen de subcontratación no excluye a la empresa principal de la aplicación de la ineficacia del despido que trata el artículo 162 del Código del Trabajo y, como se ha señalado, tampoco fue materia de discusión o indicación durante la tramitación de la Ley N° 20.123, que la contiene, lo que se puede apreciar del examen de la discusión parlamentaria llevada a cabo.

El criterio jurisprudencial aludido ha sido ratificado, además, en las sentencias dictadas por esta Corte en los roles N° 15.516-2018, 31.633-2018, N° 16.703-2019, N° 18.668-2019, y últimamente en los fallos dictados en autos roles N° 149-2021, N° 39.080-2021, N° 49.533-2021 y N° 121.783-2022.

Sexto: Que, en consecuencia, yerra la Corte de Apelaciones de Valparaíso al decidir excluir de los efectos de la nulidad del despido a la empresa mandante, esto es, a la Municipalidad de Llay Llay.



En efecto, sobre la premisa de lo que se ha venido razonando, el recurso de nulidad interpuesto en forma subsidiaria, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción al artículos 162 del mismo cuerpo legal, debió ser desestimado.

Séptimo: Que, por las consideraciones antes dichas, y habiendo determinado la interpretación que esta Corte estima acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de unificación de jurisprudencia será acogido en los términos que se indicarán.

Por lo reflexionado, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se acoge** el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante, en relación a la sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que hizo lugar al recurso de nulidad interpuesto por la demandada solidaria, Municipalidad de Llay Llay, contra la sentencia de veinte de enero de dos mil veintidós, emanada del Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, en los autos RIT 0-146-2020, RUC 2040295253-K, y, en su lugar, se declara que se **rechaza** el referido recurso de nulidad, manteniéndose la decisión adoptada por la sentencia de primera instancia.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 14.044-2022.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señora María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., ministra suplente señora María Loreto Gutiérrez A., y los abogados integrantes señora Carolina Coppo D., y señor Gonzalo Ruz L. No firma la ministra suplente señora Gutiérrez y la abogada integrante señora Coppo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia la primera y por estar ausente la segunda. Santiago, diecinueve de junio de dos mil veintitrés.





En Santiago, a diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

